SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 1478

10 de agosto de 2010

Presentado por la señora *Raschke Martínez*

Referido a

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Educación y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva referente al programa de compra e instalación de cámaras de seguridad en las escuelas públicas del Departamento de Educación y el cumplimiento con la Ley Núm. 110 de 31 de mayo de 2006, conocida como “Ley de la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las Escuelas”; y todas aquellas iniciativas relacionadas a la seguridad en los planteles escolares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es de conocimiento general la alarmante situación de la incidencia criminal en Puerto Rico. A diario vemos como los distintos medios noticiosos reseñan las incidencias ocurridas, específicamente las relativas a los delitos tipo I.

Los planteles del sistema de educación pública no están exentos de esta realidad. Robos, escalamientos, vandalismo y asaltos, son algunos de los problemas que aquejan a nuestras escuelas y a la sociedad puertorriqueña. Dichas actividades delictivas, sumadas a otros problemas que atraviesa el Departamento de Educación, desmotivan, tanto a estudiantes, como a maestros (as) amenazando la calidad educativa ofrecida y redundando en altos costos en el reemplazo y arreglo de equipos afectados.

La Ley Num. 110 del 31 de mayo de 2006, conocida como “Ley de la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las Escuelas”, esboza la importancia del involucramiento de todos los componentes de la comunidad escolar y el gobierno

en mantener la seguridad de las escuelas. Además, en su inciso (g) del Artículo 3.01 dicta que: “[l]as autoridades escolares tendrán la responsabilidad de coordinar con la Policía de Puerto Rico la instalación de dispositivos de seguridad, tales como: cámaras de video y sistemas de alarmas, en aquellas escuelas declaradas no seguras por el Departamento de Educación”.

El 14 de agosto de 2008, el pasado gobernador de Puerto Rico, Lcdo. Aníbal Acevedo Vilá, anunció la primera fase de instalación de seiscientos cincuenta (650) cámaras de seguridad en ciento treinta (130) escuelas públicas del país clasificadas como “escuelas no seguras”. El programa, cuya inversión de fondos federales fue de aproximadamente \$9.9 millones de dólares, impactaría cuatrocientas (400) escuelas para finales de diciembre de 2008 y las mismas estarían interconectadas a un centro de operaciones en las oficinas centrales del Departamento de Educación con capacidad para vigilar hasta mil (1,000) escuelas, durante veinticuatro (24) horas.

Dos años más tarde de haberse anunciado dicha iniciativa se desconocen los resultados de la misma. Aunque existen escuelas con cámaras instaladas, muchas de éstas no se encuentran en uso o han sido vandalizadas. Problemas con la infraestructura tecnológica han impedido la conexión de las mismas, en la mayoría de los casos, al centro de vigilancia propuesto y continúan siendo objeto de los mismos problemas.

Por tanto, el Senado de Puerto Rico entiende meritorio el investigar todo el andamiaje relacionado a la seguridad en las escuelas públicas, el proceso de compra, instalación y desarrollo del programa de cámaras de seguridad. Así también su cumplimiento con el ordenamiento jurídico vigente en aras de velar por el bienestar, seguridad y calidad de vida de la comunidad escolar de la Isla.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1- Se ordena a la Comisión de Educación y Asuntos de la Familia del Senado de
- 2 Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva referente al programa de compra e
- 3 instalación de cámaras de seguridad en las escuelas públicas del Departamento de Educación
- 4 y el cumplimiento con la Ley Núm. 110 de 31 de mayo de 2006, conocida como “Ley de la
- 5 Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las
- 6 Escuelas”; y todas aquellas iniciativas relacionadas a la seguridad en los planteles escolares.

1 Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y
2 recomendaciones dentro de los noventa (90) días de aprobada esta Resolución.

3 Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
4 aprobación.